

Misión de Acompañamiento a Afro-Colombianos de la CBTU en Colombia



“Si los Estados Unidos fuera en la mayoría de las formas, un país más estrictamente moderno o burgués que cualquier en Europa, sus plantaciones, en casa o en el extranjero, representa un tipo de empresa solamente separados por un par de años de los tiempos de la esclavitud. A éstos hay que añadir las grandes refinерías de azúcar. Tomados en conjunto representaban un capitalismo más primitivo que las nuevas industrias manufactureras; que podrían ser llamados una prolongación de la unidad antigua del Sur para más tierra y mano de obra barata”.

-V.G Kiernan

Desde el 1 al 6 de Octubre, 2015 la Coalición de Sindicalistas Negros (CBTU, por sus siglas en inglés) organizó una delegación a Colombia para averiguar el estado de los asuntos laborales, civiles, y los derechos humanos en las comunidades Afro-Colombianas. El CBTU decidió visitar Colombia a petición

del Consejo Nacional de Paz Afro-Colombiano (CONPA)ⁱ quien participo en la conferencia anual de CBTU en Mayo del 2015 en Chicago, Illinois. El viaje a Colombia fue dirigido por el Representante Hank Johnson (un Demócrata para el Cuarto Distrito de Georgia desde 2007). Johnson ha sido un defensor de los derechos humanos y derechos laborales de las comunidades Afro-Colombianas y es miembro del Grupo de Supervisión de Derechos Laborales en el Congreso de los EE.UU. Sindicalistas y activistas estadounidensesⁱⁱ también se unieron al Sr. Johnson en esta visita. CONPA organizó la agenda que incluyó visitas a Cali, Quibdó y Bogotá y que también conto con el apoyo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en ingles).

Resumen de los Resultados:

*** Cuatro años después de que el Plan de Acción Laboral entre los Estados Unidos-Colombia (PAL) se firmó en el 2011, las amenazas de violencia y de muerte contra sindicalistas continúan a un ritmo constante y la impunidad de estos crímenes sigue siendo la norma. Según el informe más reciente de la Escuela Nacional Sindical (ENS), del 4 de Abril de 2015, los trabajadores Colombianos han sufrido más de 1.933 amenazas y actos de violencia, incluyendo 105 asesinatos de activistas sindicalistas y 1.337 amenazas de muerte. Como aprendimos durante nuestra visita, estas cifras son muy problemáticas, y estos actos de violencia contra sindicalistas son sub-representadas.**

*** Mientras que el PAL pretende acabar con la subcontratación que se utiliza para debilitar a los sindicatos, dicha subcontratación sigue sin freno en Colombia, sin absolutamente ningunas sanciones efectivas que se impongan contra los miles de empleadores infractores.**

*** La población Afro-Colombiana se ve particularmente afectada por actos violentos y abusos laborales, en particular en las industrias agrícolas y extractivas en el Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Las autoridades no están garantizando que la seguridad efectiva se proporciona a los líderes Afro-Colombianos ni están garantizando la justicia casos de ataques y amenazas contra esta población.**

*** En Cali, una ciudad de un millón de personas de descendencia Africana, siete sindicalistas fueron asesinados por hombres armados y enmascarados desde Febrero pasado, y los sindicalistas son sometidos regularmente a un sinfín de abusos, como amenazas y actos violentos contra la actividad sindical.**

*** En la ciudad de Buenaventura donde se encuentra una gran población Afro-descendiente , y una ciudad clave para el Tratado de Libre Comercio (TLC) en Colombia por sus puertos, los líderes sociales y laborales son amenazados, desaparecidos, asesinados y mutilados en las "casas de pique."**

*** Mientras que Colombia tiene la segunda mayor población de desplazados internos en el mundo (más de 7.000.000), los Afro-Colombianos están especialmente afectados por tal desplazamiento con más de 2 millones de Afro-Colombianos desplazados. A pesar de las conversaciones de paz las minorías étnicas siguen siendo desplazadas debido a la violencia, la inseguridad, y las acciones de los grupos armados ilegales**

*** Mujeres y jóvenes de Afro-descendencia se preocupan por la discriminación de género, la violencia sexual, el reclutamiento forzado y la falta de oportunidades que no son abordados por el gobierno.**

*** La población Afro-Colombiana también se ve desproporcionadamente afectada por la pobreza, la falta de servicios, infraestructura, y el desempleo. Todos estos problemas han sido exacerbados por el TLC que ha abierto su territorio, sobre todo en la región del Pacífico, y ha causado explotación y el robo de la tierra.**

*** El racismo contra los Afro-descendientes sigue siendo un obstáculo importante para ejercer sus derechos plenamente como ciudadanos de Colombia.**

*** Los derechos autónomos de las comunidades Indígenas incluyendo su jurisdicción judicial están sufriendo regresiones. La criminalización del prominente líder, Feliciano Valencia, debe ser abordada.**

*** Los grupos paramilitares siguen activos en áreas Afro-Colombianas y siguen siendo una amenaza para los sindicalistas, defensores de derechos humanos, y las minorías étnicas. Se requiere más acción por parte de las autoridades para dismantelar sus redes militares, económicas y operativas.**

*** Las conversaciones de paz entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son clave para ponerle un fin al conflicto y para asegurar la protección de las minorías étnicas de mayor daño. Sin embargo, las autoridades territoriales y los líderes Afro-Colombianos no han formado parte de la mesa de negociación y sus recomendaciones no están integradas en los pre-acuerdos. Para que el acuerdo de paz sea sostenible, la perspectiva y las propuestas de la CONPA deben ser apoyadas por la comunidad internacional.**

Hallazgos

Nuestra delegación fue recibida con una cálida recepción por parte de los grupos Afro-Colombianos que forman parte de CONPA incluyendo CLAF, AFRODES y PCN en Cali. En esta cena, nos dieron una orientación básica de la dinámica compleja de los derechos humanos, los derechos laborales y las dinámicas políticas de discriminación racial que se enfrentan los Afro-Colombianos en todo el país. Al día siguiente, la delegación CBTU se reunió con trabajadores de caña de azúcar a las 5 am en el municipio de Palmira a las afueras de Cali (Valle del Cauca). Estos trabajadores de la caña de azúcar todavía están tratando de recuperarse de una huelga en que participaron en 2008. Más del 90 por ciento de los trabajadores de la caña de azúcar son Afro-descendiente. Uno de los trabajadores de caña Afro-descendiente con quien nos reunimos, caracterizó el trabajo de caña de azúcar como una forma de esclavitud. Este es un caso claro en que los derechos de los Afro-descendientes y los trabajadores realmente se intersectan.

Los trabajadores explicaron que no tienen un salario básico, sino se les paga un salario mínimo por partes. Ellos dicen que han dado sus vidas a las empresas de azúcar. Aproximadamente 1.000 trabajadores trabajan en estos campos de caña de azúcar y hay cerca de 200 incapacitados debido al estrés y agotador ritmo del trabajo. Las normas de seguridad y salud de los trabajadores no son reguladas. En varias ocasiones estos trabajadores trabajan siete días a la semana, trece horas del día, sin pago de horas extras. En violación de las leyes laborales colombianas, los trabajadores explicaron que, hace unos quince o veinte años, las empresas de caña de azúcar instituyeron nuevos procedimientos que hicieron el trabajo más oneroso, por ejemplo, al obligar a los trabajadores a ir a los campos ardientes y seguir trabajando.

Además, su sindicato, SINAL14, tiene la dificultad añadida de tener que negociar sobre los salarios y las condiciones de trabajo con un subcontratista y no con la compañía que los emplea. El Plan de Acción Laboral (PAL), que Colombia y los EE.UU. firmaron en 2011 prometió enfrentar al problema de los subcontratistas. Sin embargo, hablamos con la Embajada de los Estados Unidos, el Centro de Solidaridad, la OIT y los trabajadores y sindicalistas, y todos estuvieron de acuerdo que el PAL ofrece un buen marco para enfrentar este problema. Sin embargo, las autoridades Colombianas no están cumpliendo o ejecutando estos acuerdos correctamente. Colombia ha prohibido las Cooperativas para cumplir con el PAL, pero al mismo tiempo ha permitido la proliferación de otras formas de subcontratación con otros nombres tales como SAS, "Contratos sindicales", y compañías afiliadas con el

objetivo de continuar estas prácticas y eludir el PAL. La subcontratación prevalece en estas nuevas entidades las cuales en muchos casos se deshacen de los sindicatos. Las organizaciones sindicalistas independientes no sólo tienen que competir con la subcontratación, sino también con la creación de sindicatos de la "compañía", algunos de los cuales se cree que tienen vínculos con paramilitares.

La subcontratación no sólo es problemática porque debilita los derechos laborales de los trabajadores; sino que también conduce a la disminución de la calidad de los servicios prestados a los clientes. Guardaespaldas que tienen la tarea de proteger la vida de sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y líderes políticos también se subcontratan a través de un modelo de empleo llamado "uniones temporales." Los miembros de SINPROSEC, un sindicato que representa a los guardaespaldas, detallaron como servicios de seguridad para los beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección sufren debido a la subcontratación. Aparte del hecho que la subcontratación facilita la corrupción que ocurre en la provisión de servicios, también conduce al descontento de los encargados de proteger a los destinatarios. Por ejemplo, los fondos para los viajes de los guardaespaldas no siempre se proporcionan y las horas de trabajo extras no se pagan. El no garantizar los derechos laborales de los guardaespaldas básicamente debilita la capacidad de la Unidad Nacional de Protección para asegurarse de que sus beneficiarios estén adecuadamente protegidos. Los EE.UU. y los gobiernos Colombianos debemos tomar medidas más audaces para ponerle remedio a la subcontratación. De hecho, de acuerdo con el Senador Colombiano Alexander López Maya, ahora hay menos grupos sindicalistas en Colombia que antes que se aprobó el PAL en el 2011.

Aprendimos algunas cosas muy interesantes en nuestra reunión con los trabajadores de la caña de azúcar. Por ejemplo, uno de los representantes del Senador López Maya indicó que ha habido más de 300 sindicalistas asesinados desde que el PAL se firmó en el año 2011. Se trata de un número mucho mayor de lo que se nos dice oficialmente. Y al parecer, hay una gran lucha que pasa todos los años sobre quien contara este número de sindicalistas asesinados. Citaron por ejemplo, el caso de Daniel Aguirre, un dirigente sindical del sindicato de la caña de azúcar que fue asesinado en el 2012. Él no fue incluido en la lista oficial de los sindicalistas muertos porque, como es bastante típico, el gobierno colombiano afirmó que no fue asesinado porque era un sindicalista, sino que presuntamente fue asesinado por una esposa enojada. El grupo de trabajadores de caña de azúcar se rieron porque no pueden creer la cantidad de sindicalistas que tienen esposas y amantes que los matan, porque eso parece ser una afirmación común del gobierno. Ellos creen que hay muchos más sindicalistas que son asesinados que no están siendo reconocidos oficialmente.

Escuchamos a los trabajadores de la caña de azúcar, así como un número de otros trabajadores—por ejemplo, de Coca-Cola, de Cadbury Adams y de GM— sobre despidos arbitrarios y las políticas de discapacidad en el lugar de trabajo que son pésimas. Hay miles de trabajadores en Colombia que son despedidos de sus trabajos porque están lesionados lo cual es ilegal bajo la ley actual de Colombia. No hay ningún sistema de compensación para los trabajadores para indemnizar los salarios perdidos. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo está trabajando actualmente en un proyecto de ley que permitiría a los trabajadores lesionados ser despedidos legalmente, y por lo tanto, una de las grandes solicitudes de este viaje fue que pongamos presión sobre los EE.UU. y el gobierno de Colombia para evitar que esta ley pueda pasar.

También pasamos tiempo en la reunión de Cali con un número de sindicalistas y miembros del Consejo Laboral Afro-Colombiano (CLAF). Algunos de los más importantes incluyeron SINTRAEMCALI, que es el sindicato municipal de Cali. Fue establecido hace alrededor de 78 años y fue el objetivo, entre otras 150 personas y grupos, de la "Operación Dragón" en la que los líderes de organizaciones sociales, laborales y de derechos humanos fueron amenazados con asesinato. Esta lista incluía a Berenice Celeita, una

destacada defensora de los derechos humanos con NOMADESC y quien recibió el Premio de los Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Algo bastante extraño, pero revelador, es que el autor intelectual de "Operación Dragón", el teniente coronel (Ret) Julián Villate, fue contratado como asesor de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá después de que su papel en estas amenazas fuera conocido. Luego terminó trabajando en la seguridad de la empresa minera Estadounidense Drummond después de una recomendación positiva por parte de la Embajada de Estados Unidos.

Ocho líderes de SINTRAEMCALI han sido asesinados en los últimos siete años. Sus instalaciones fueron bombardeadas y el hogar del vicepresidente atacado con bombas en los últimos dos años. Francisco Santos, quien era el Vicepresidente de Colombia bajo el Presidente Álvaro Uribe, había acusado el sindicato falsamente de ser guerrillero, y estas acusaciones hicieron que el sindicato se volviera objetivo para paramilitares y militares.

Lo que el líder de este sindicato indicó fue que todo sigue igual para ellos en términos de represión y falta de derechos de organización, incluso a pesar del PAL, algo que escuchamos una y otra vez. Los convenios colectivos son deliberadamente violados por empresas. Los líderes de los sindicatos continúan siendo amenazados por los paramilitares, y algunos asesinados por los paramilitares. Lo que los líderes sindicalistas piden es que se haga presión para que se implemente la justicia en este tema.

También escuchamos de trabajadores del sector azucarero que fueron despedidos del ingenio San Carlos en 2009. 315 trabajadores fueron despedidos por intentar formar un sindicato y nos informaron que la propia empresa está vinculada con los paramilitares incluyendo el alto comandante conocido como "HH", quien fue extraditado a los Estados Unidos en 2009. Una vez más, estos trabajadores indicaron que el Plan de Acción Laboral tiene que hacerse valer, ya que en la actualidad no se está cumpliendo en lo absoluto. Después escuchamos representantes del sindicato de trabajadores de trigo, Sintrallorede. Ellos nuevamente declararon que a pesar del Plan de Acción Laboral su compañía no ha logrado cumplir con los acuerdos y han violado deliberadamente sus derechos de negociación colectiva. Dijeron que alrededor de 2010, toda la industria del trigo hizo un movimiento para deshacerse de los acuerdos de negociación y de los sindicatos a la vez.

Luego nos encontramos con el sindicato de agentes de tráfico, ASAGETRA, en Buenaventura, una de las ciudades portuarias principales de Colombia. Su representante dijo que la empresa no les había pagado a los trabajadores durante 12 meses, y que además de no tener un salario, estos trabajadores ahora tienen que pagar su propio seguro social, pagar sus propios seguros de salud, y realizar sus propios pagos de pensiones. También afirmó que hay un complot en curso para asesinar a tres de los líderes de su sindicato. Mencionó las "casas de pique" en Buenaventura, que es un fenómeno bien documentado en el que los paramilitares descuartizan a la gente mientras aún están vivas con el fin de aterrorizar a la comunidad con sus gritos. Esto continúa a pesar de la presencia militar y policial que existe en Buenaventura. El hecho es que los miembros de las fuerzas de seguridad están mirando hacia el otro lado y no detienen los paramilitares en los abusos y las actividades ilícitas (tráfico de drogas, extorsión, etc.). Esto ha llevado a muchos residentes a la conclusión de que, al menos tácitamente, el ejército apoya esta práctica. Como fue señalado por los representantes sindicalistas, las amenazas contra los líderes del sindicato son más extrañas porque su trabajo es mantener la seguridad del tráfico, y sin embargo, están siendo amenazados con el macabro asesinato.

Los trabajadores del sector de los puertos, un sector prioritario del PAL, siguen enfrentándose con graves obstáculos contra la sindicalización. De acuerdo a la Unión Portuaria durante 2008-2012, los trabajadores colombianos recibieron más apoyo que nunca por parte de sindicalistas, legisladores, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos, estudiantes, jubilados y profesores en los

Estados Unidos para superar las malas prácticas laborales y la persecución de los sindicatos que incluían la negación de la negociación colectiva, los asesinatos, la violación de las libertades sindicales, y la impunidad que condujo a la creación del Ministerio de Trabajo. Como tal, más inspectores de trabajo fueron nombrados, las cooperativas fueron prohibidas, los códigos penales contra aquellos que violan las libertades sindicales fueron fortalecidos, y fiscales generales fueron nombrados para poner fin a la impunidad en los casos de asesinatos de sindicalistas. También el PAL llevó a un aumento significativo de la cantidad pagada en multas a través de la inter-mediación legal, y la emisión de un nuevo manual del inspector de trabajo.

Mientras todas las medidas adoptadas fueron positivas, la Unión Portuaria (UP) lamenta que el sector empresarial no se ha sentido cómodo y que el gobierno no ha exigido suficientemente que la ley se cumpla y que estas acciones sean totalmente implementadas. Los dueños de negocios tienen una contra-reforma lista que eliminara muchos de estos avances. Al igual que en el sector del azúcar, las cooperativas ya no interceden pero se han transformado en Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) o sindicatos falsos.

En respuesta a esto, la UP propone que se tomen cuatro acciones para remediar estos problemas. Que el Estado colombiano y su tesorería reconozca y tome acción sobre el hecho de que las empresas intermediarias no les han pagado pensiones a los trabajadores en los últimos 25 años. En segundo lugar, que los EE.UU. y Colombia garanticen que haya contratación directa de los trabajadores para realizar funciones fundamentales. Y tercero, que el modelo de "contrato sindical" se elimine y, por último, que el sector portuario contrate miembros de la población étnica donde opera la empresa.

Otro sindicato en este sector, SINTRAPORTECSA, nos informó que existe una cultura de anti-sindicalismo en las empresas que operan en el puerto, en donde la libertad de asociación es violada, y hay una gran presión contra los trabajadores para que no se unan a un sindicato y acepten la subcontratación como una norma. Los miembros de este sindicato han recibido amenazas de muerte. Al menos cinco esfuerzos realizados por el sindicato para informar a los Inspectores del trabajo y agencias independientes como la Procuraduría de estos actos de injusticias fueron interrumpidos debido a la coerción y la corrupción. El sentimiento es que los inspectores y funcionarios laborales trabajan "al servicio de las empresas... no de los trabajadores." En la actualidad, el sindicato ha sido advertido por los administradores de la empresa que ya no estarán en existencia en el futuro cercano.

Varios de los trabajadores denunciaron los esfuerzos de privatización, tanto en Buenaventura, Cali y otras partes del Valle del Cauca. Señalaron que los intentos de privatización en ambas ciudades, y como un trabajador explicó "se ha traducido en nada más que el desempleo, la pobreza, la miseria y la violencia." Un trabajador de Buenaventura indicó que el sindicato recibió amenazas de muerte después de que se quejaron a la OIT sobre las condiciones de trabajo. La misma persona dijo que en Buenaventura la vida de un ser humano no vale nada.

El Senador Alexander López Maya, quien fue otro objetivo de la "Operación Dragón" luego habló y dijo que el Estado Colombiano ha fracasado por completo en poder garantizar los derechos de los trabajadores como lo exige el Plan de Acción Laboral. El Senador también expreso que el gobierno Colombiano está permitiendo que se destruyan los sindicatos mediante la subcontratación. Dijo que hay dos guerras ocurriendo simultáneamente en Colombia - uno es el conflicto interno que es la guerra contra la insurgencia en la que 5.000 personas mueren al año y hay una guerra económica y en el que numerosos sindicatos y miles de puestos de trabajo están siendo destruidos. Señaló que miles de sindicalistas han sido asesinados en los últimos 20 años y que sólo cinco millones de personas en el país tienen un contrato laboral directo con su empleador. Eso es, de una población de alrededor de

cincuenta millones. Dijo que todavía existen paramilitares y todavía son apoyados por el estado Colombiano. Esto contradice la afirmación del Embajador de los Estados Unidos, con quien nos reunimos y quien afirmó que esto no es cierto.

Luego escuchamos de los representantes Afro-Colombianos de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Marcha de Mujeres Negras por la Vida y la Dignidad. Ellos hablaron de cómo la minería ilegal es un problema enorme que está llevando a los abusos contra las comunidades Afro-Colombianas y que esto se está acelerando por el TLC. La minería ilegal, mucha de la cual se está llevando a cabo por los grupos paramilitares, está provocando el desplazamiento forzado y la degradación ambiental. Víctor indicó que hay más de cuatro súper empresarios que han tomado la tierra de la gente con el pretexto de la reforma agraria. Al mismo tiempo, existe el confinamiento forzado porque la comunidad está rodeada de minas terrestres. Habló sobre el hecho de que cinco ríos han sido contaminados por las empresas mineras. Además, los líderes Afro-Colombianos han estado recibiendo amenazas de muerte. Indicó que la comunidad Afro-Colombiana quiere que su tierra sea reconocida como territorios ancestrales como ya es exigido por la Ley 70. Pero también hablo del problema que más empresas están entrando a su territorio sin consulta previa.

Después escuchamos de las mujeres Afro-Colombianas del Norte del Cauca. Ellas contaron su historia de cómo llegaron de África a Colombia como esclavos en 1636 y, hasta hoy, no están protegidos por el Estado; sufren constantes amenazas de muerte por parte del ejército, así como los grupos armados ilegales. Una representante dijo que el gobierno ha reconocido que sus derechos sobre el territorio han sido violados. De hecho, ganaron una serie de decisiones judiciales en virtud de la Ley 70 que se ha adoptado para proteger sus tierras territorial, pero ninguna de estas decisiones judiciales han sido implementadas. Ella dijo que en vez se vive en este es un sistema de esclavitud, y de asesinato. Ella explicó que es el blanco de una serie de grupos armados, especialmente los paramilitares, y también por las FARC que recientemente asesino a uno de sus líderes. Los helicópteros han bombardeado sus hogares, las minas terrestres se han establecido alrededor de sus comunidades y el agua con que dependen se está contaminando con mercurio por las operaciones mineras ilegales. Pero, dice, con justa indignación, "¿a quién le importa, somos Negros?!" Ella pregunta cómo se habla de un proceso de paz cuando hay "casas de pique" que operan en Colombia. *Ella dice que el sesenta por ciento de su territorio está siendo destruido por las operaciones mineras. También dijo que los EE.UU. ha financiado esta guerra en Colombia y que los EE.UU. tienen el deber de construir la paz. Concluyó diciendo: "Nosotros los Afro-Colombianos les dimos luz a la humanidad, tenemos que darle luz a la paz".*

También escuchamos de los líderes indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que hablaron de la gran brecha que existe en la sociedad entre los élites no-étnicos en la política y la que están encargados de las comunidades Afro-Colombianas e Indígenas. Su preocupación prioritaria es la detención de uno de sus líderes principales Indígenas, Feliciano Valencia. Esto ocurrió porque un soldado se infiltró en una protesta Indígena pacífica. Este soldado que pretendía ser Indígena intentó traer bombas a la protesta y se le dio latigazos, algo que es legal en la jurisdicción Indígena que también es reconocido por el Estado Colombiano. Afirmaron que las protestas han sido criminalizadas y que Feliciano realmente está en la cárcel debido a su oposición abierta a la represión de los Indígenas. Dijeron que, en términos de las conversaciones de paz, ni el gobierno ni las FARC los representa en la mesa de diálogos y que tienen derecho a defender su propio nombre. Dijeron que los que participan en los grupos sociales están siendo criminalizados y 40 miembros de su grupo han sido asesinados por defender el territorio que los indígenas describen como "la Madre Tierra." Ellos nos urgieron a abogar en su nombre a los Estados Unidos porque creen que esto podría tener un impacto en Colombia.

Tanto las comunidades Indígenas con quienes hablamos y los Afro-Colombianos dejaron en claro que bajo la Constitución de Colombia, Colombia es oficialmente un país pluriétnico, pero no es tratado de esa manera. El racismo y la discriminación es rampante y los de ascendencia Española están tratando de imponerles políticas económicas que no toman en cuenta su autonomía. Los planes de desarrollo económico tampoco toman en cuenta sus estilos de vida sostenibles con el medio ambiente. Dijeron que hay una gran preocupación por los derechos de los Indígenas y Afro-descendientes "vis-à-vis el TLC que amenaza tanto a la diversidad étnica y la autonomía territorial, ya que está permitiendo que las empresas tengan acceso a sus tierras para la explotación empresarial. Reiteraron que no se oponen al desarrollo económico, una afirmación errónea dicha a menudo por miembros de las personas del gobierno vinculados a intereses corporativos; sino que les gustaría ver una forma de desarrollo que es ambientalmente y económicamente sostenible en el largo plazo y que incluye sus comunidades en el desarrollo. En este momento, la mayor parte del desarrollo beneficia a los extranjeros con consecuencias perjudiciales a sus comunidades.

Luego escuchamos a una activista de derechos humanos de Buenaventura quien de nuevo habló sobre el desplazamiento forzado sistemático y del desmembramiento de personas a manos de paramilitares en los barrios empobrecidos de Baja Mar, donde se están ampliando las operaciones portuarias. También habló de la desaparición forzada, de los cuales se han producido en cientos en Buenaventura en los últimos años. Ella nos dijo que el ochenta por ciento de los nuevos desplazados en Colombia son Afro-descendientes que viven en la pobreza extrema. Una vez más, los Afro-descendientes no se oponen al desarrollo económico de Buenaventura, pero están muy preocupados por el desarrollo que no es inclusivo de sus comunidades y que están vinculadas a las violaciones de los derechos humanos.

También escuchamos de la defensora de las víctimas, Martha Giraldo, quien forma parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). Su padre era un sindicalista que fue asesinado en una supuesta operación de "falsos positivos". Ella dijo que los autores de la violencia del Estado en Colombia reciben ayuda militar de los EE.UU., por tanto, tiene la responsabilidad de los actos del Estado. Ella indica que más de 5.000 familias han sido afectadas por las ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército y hay impunidad en curso de estos homicidios. Ella dijo que este problema se debe hacer visible y también las desapariciones forzadas. Han habido más de 50.000 personas desaparecidas en Colombia en los últimos 20 años y esto genera terror entre la población. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el número de desapariciones en los últimos 50 años es superior a los 92.000.

Luego escuchamos de los activistas de la comunidad en relación con la violencia que envuelve la ciudad de Cali donde viven aproximadamente un millón de Afro-descendientes, incluyendo muchos desplazados de toda la región del Pacífico. Hay más Afro-descendientes que hablan Español viviendo en Cali que en cualquier otra área en el Hemisferio Occidental. Cali también es una de las siete ciudades más peligrosas del planeta. Treinta personas mueren cada día en Cali, y una gran razón por la violencia que se deriva en la ciudad es porque Cali ha sido inundada por personas que han sido desplazadas de otro lugar, que no tienen trabajo, que no tienen la protección del Estado, y no tienen apoyo social y, por lo tanto, muchos de ellos terminan presionados a ser reclutados por las pandillas y otras vidas de crimen. Este individuo expresó su preocupación por el "abandono de las armas" que se están discutiendo en La Habana debido a que no está seguro de cómo esto afectará a la población civil en las zonas urbanas. Esta preocupación es debida a la presencia de otros grupos armados ilegales en los entornos urbanos y como esto podrá sabotear la aplicación de la paz. Es importante que los Afro-Colombianos tengan un lugar en la mesa para discutir cómo se van a responder estas cuestiones.

La delegación también visitó a las familias desplazadas que fueron reasentadas por la fuerza en refugios patrocinados por el gobierno en el "llano verde" en el Distrito de Agua Blanca. Esta zona es muy peligrosa debido a la presencia de los grupos armados ilegales y la vivienda es inadecuada para personas de Afro-descendencia que tienen familias extendidas. La mayoría de las familias desplazadas están encabezadas por mujeres Afro-Colombianas que son cabeza de casa y que deben encontrar soluciones por su cuenta. La aglomeración en viviendas es común ya que cuatro personas se ven obligadas a vivir en casas creadas solo para sólo dos habitantes. Estas casas están mal equipadas para los minusválidos y personas de edad. Su ubicación es muy lejos del centro de la ciudad, y esto hace conseguir un trabajo o acceso a la economía informal muy difícil. A menudo, los residentes del Distrito de Agua Blanca son rechazados para puestos de trabajo una vez que dan a conocer su vivienda debido al estigma que existe para las personas que viven en esta zona. Fuimos bombardeados con numerosos casos de negligencia por parte de las autoridades nacionales y las reclamaciones de los desplazados. Los pocos desplazados que recibieron respuestas por parte del gobierno, recibieron respuestas sólo después de presentar demandas judiciales. AFRODES juega un papel muy importante para la ayuda de los desplazados para que se organicen y se unan para encontrar soluciones conjuntas a sus problemas.

Nosotros volamos desde Cali a la ciudad de Quibdó, la capital del departamento de Chocó. Está a 30 kilómetros tanto del Atlántico y el Pacífico y, sin embargo no hay vías de Quibdó al océano, la pobreza es extrema, y a pesar de ser una de las ciudades más húmedas del mundo con 400 pulgadas de lluvia al año, no hay aguas residuales o agua corriente. En Quibdó nos reunimos con varios representantes del Foro Interétnico de Solidaridad (Chocó), que es la organización que reúne a los consejos comunitarios Afro-Colombianos (autoridades territoriales), Cabildos Indígenas, y a las organizaciones sociales del Departamento y los políticos locales, como la alcaldesa de Quibdó, Zulia Mena. Hablamos con un sacerdote Católico que explico que la mitad de la ciudad de Quibdó se compone de una población desplazada. Dijo que la Iglesia Católica, una vez no aceptada por los esclavos, ahora es una iglesia del pueblo. En su momento los esclavos odiaban la fiesta de San Francisco - ahora los Afro-Colombianos lo apoyan y lo han convertido en un festival de un día completo que es reconocido por UNESCO como un acontecimiento de importancia histórica. Habló sobre el desplazamiento de los Afro-Colombianos a partir de 1996 en adelante por la "Operación Génesis", una operación militar-paramilitar conjunta mediante el cual el Estado Colombiano fue condenado como responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones cometidas durante el tiempo que los paramilitares tomaron control de la región y por las acciones de los grupos guerrilleros. Los primeros desplazamientos iniciaron desde lugares como Riosucio, desde donde el líder de nuestra delegación, Marino Córdoba, fue desplazado en 1997.

Después también escuchamos de mujeres Afro-Colombianas y jóvenes de la Comisión de Género de COCOMACIA, la Ruta Pacífica de Mujeres, OBAPO y la Red Departamental de Mujeres Chocoanas. Las mujeres discutieron que las preocupaciones de las mujeres Afro-Colombianas tienen que ser integradas en los pre-acuerdos y los esfuerzos post-conflicto con apoyo internacional. Hablaron sobre el enorme problema de la violencia de género que surgió del conflicto armado. Las mujeres mencionaron la Resolución de la ONU 1352 que garantiza los derechos de las mujeres en la paz, pero que están siendo violados a lo diario. Las mujeres tienen derecho a llevar una vida sin violencia. Quieren un observatorio permanente para garantizar los derechos de las mujeres, por ejemplo, contra la violencia de género. Además, insistieron en que las empresas que operan en esta región deben hacerlo de forma sostenible; debe existir la inclusión efectiva de las mujeres en el proceso político, y que todos deben trabajar para garantizar que los territorios Afro-Colombianos se mantengan sin violencia.

Luego nos enteramos de los problemas específicos que enfrentan los jóvenes Afro-descendientes. Para muchos, no existen buenas posibilidades de educación ni de empleo. Los pocos que pueden obtener

acceso a una educación no pueden encontrar un trabajo adecuado, por lo que son terminan en el sector informal. Los jóvenes están afectados desproporcionadamente por el conflicto armado interno, ya que son los grupos más vulnerables y más susceptibles a ser reclutados por las pandillas, y grupos legales e ilegales. La mayoría de los miembros de la comunidad Afro-Colombiana son los jóvenes y los niños que se utilizan a menudo como escudos humanos y son utilizados por los grupos armados para llevar a cabo atrocidades. Mencionaron que Quibdó, en el departamento del Chocó, es noventa por ciento Afro-descendiente, el siete por ciento Indígena y el tres por ciento mestizo. El noventa y cinco por ciento del territorio del Chocó es la propiedad comunal de los Afro-Colombianos, pero esos derechos de propiedad han sido violados. La mayoría de la población en el Chocó ha sido víctima del conflicto armado interno y gran parte de ella se enfrenta a presión debida a las operaciones mineras ilegales. En el caso de las tierras pertenecientes al Consejo de la Comunidad Afro-Colombiana de COCOMOPOCA, se estima que el setenta por ciento del territorio ha sido otorgada en concesión a empresas o tomada por oro. Al mismo tiempo, las FARC está presionando a las comunidades a ser parte de su proceso político para que puedan controlar el territorio. Por lo tanto, las comunidades y los jóvenes en particular se ven atrapados en medio de competir con intereses políticos y económicos vinculados a grupos armados.

También aprendimos sobre la crisis humanitaria en el Chocó, por la falta de adherencia a los estándares internacionales de derechos humanos por parte de las diferentes facciones armadas. Las comunidades Afro-Colombianas se han visto obligadas a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) para buscar protección en relación con el desplazamiento y las crisis humanitarias vinculadas a los proyectos económicos, como es el caso de Jiguamiandó y Curvaradó. Mientras tanto, 160 líderes de la población Afro-Colombiana e Indígenas han sido asesinadas por paramilitares en la región, y en los últimos tiempos, ha habido un aumento en las amenazas de muerte contra los líderes de estos grupos. Ellos han pedido medidas de protección por parte del Estado, pero han caído en oídos sordos. La Unidad Nacional de Protección no ha avanzado con el decreto necesario para ser capaz de proporcionar medidas de protección colectiva para grupos Afro-descendientes que viven en las zonas rurales. Como consecuencia del acuerdo de libre comercio, la minería y otras formas de extracción de recursos han crecido de manera exponencial, lo que lleva a la "exterminación de nuestro pueblo, físicamente, espiritualmente y culturalmente". Para este año, se han registrado 82.500 víctimas del conflicto armado, y de ellos, 69.000 son personas que han sido desplazados por fuerza de acuerdo con la Registraduría Nacional de Colombia.

Un factor que por gran parte ha generado la violencia y el desplazamiento en esta región es que los intereses económicos se han implementado a través de medios ilegales, violentos, y fraudulentos por los grupos armados ilegales. Las guerrillas izquierdistas de las FARC y el ELN tienen una fuerte presencia en esta región y ellos violan los derechos de los Afro-Colombianos presionando estas comunidades y esto genera desplazamientos. Las FARC es más conocido por su papel en la masacre trágica de Bojayá del 2002. Las comunidades Afro-Colombianas están preocupadas en cómo les afectara la transición del conflicto a la paz en sus territorios donde hay una presencia de las FARC porque este grupo no ha respetado su autonomía y sus derechos colectivos de la tierra.

Los grupos paramilitares, que una vez formaron parte de las Fuerzas de Autodefensa de Colombia (AUC), se desmovilizaron formalmente y se reagruparon en nuevas facciones. Estas facciones han prosperado en sus relaciones con el poder económico y político local en el Chocó. Hoy en día, estos paramilitares funcionan entre ejércitos ilegales y el crimen organizado. Después se infiltraron en estructuras estatales corruptas y débiles en el Chocó desde la década de 1990 tras la Operación Génesis y se alinearon con los líderes políticos del Chocó con el fin de ampliar su control del tráfico de drogas, y de beneficiarse de la extracción de recursos, en los territorios Afro-Colombianos e Indígenas. Los sectores en las para-economías han florecido, esto ha incluido la extracción de madera, el cultivo de la palma aceitera, la

ganadería, y los plátanos. Un acuerdo conocida como el "Plan de Singapur," documenta la campaña al Congreso de 2002 en Chocó, en referencia a un "Programa de Política Regional por un Gran, Unido, Estado, y Urabá Pacífico" o un "Programa Político para el Darién Colombiano", muestra la participación directa del entonces congresista Edgar Ulises Torres y Odín Sánchez. Torres apoyó la candidatura del Senado de Antioquia con el político Rubén Darío Quintero, quien fue el principal promotor del Programa Darién Colombiano, en el Norte del Chocó. Quintero ganó su asiento debido al control paramilitar sobre el área, solidificado por el Acuerdo de Singapur. Fue condenado a prisión en 2010. A pesar de la detención de los para-políticos a nivel regional y local en el Departamento, hay muchas más acciones que se deben hacer para dismantelar los vínculos entre estos grupos ilegales armados, políticos locales y los sectores económicos en el Chocó.

El caso más famoso de una empresa internacional que apoyo a los grupos armados para apoderarse del territorio fue Chiquita Brands International con sede en EE.UU, que se declaró culpable de una acusación del Departamento de Justicia. Esta compañía fue acusada de pagar los paramilitares por una suma de \$ 1,700,000 desde 1997-2004, y proporcionándoles 3000 armas automáticas. Según el propio Fiscal General del Presidente Uribe, Mario Iguarán, fue este apoyo de Chiquita que permitió que los paramilitares se hicieran cargo de fincas enormes en Colombia, incluyendo, en particular, la costa del Pacífico, donde muchos Afro-Colombianos viven.

En nuestro viaje de regreso a Bogotá cambiamos de avión en Medellín. Al dirigirnos a recoger nuestro equipaje, el Representante Hank Johnson se convirtió en una víctima de la discriminación racial por la seguridad del aeropuerto. El Sr. Johnson se le pidió su identificación de manera despectiva, sin razón aparente que no sea el hecho de que él es Afro-descendiente. Este incidente es un símbolo de lo que ocurre con muchos Afro-Colombianos a diario. Los Afro-Colombianos son detenidos por la policía a menudo por oficiales de seguridad y las autoridades sin unan razón legitima, y también son negados la entrada a varios establecimientos, solo por el hecho de su raza. El racismo fue un tema muy importante durante nuestro viaje. Este racismo conduce a los abusos contra los Afro-Colombianos, impide y obstruye la habilidad que se organicen como una comunidad, impide su acceso a las oportunidades y se refleja en la implementación de políticas públicas y la falta de acciones para defender sus derechos al mismo nivel que otros Colombianos. En esencia, el racismo hace a los Afro-Colombianos ciudadanos de segunda o tercera clase en Colombia.

En Bogotá nos reunimos con el Centro de Solidaridad y la OIT que indicaron que el Plan de Acción Laboral es fundamental para la lucha contra los abusos laborales en Colombia, pero que no está siendo plenamente aplicado. Estas organizaciones indicaron que el plan está siendo flagrantemente violado por una serie de empresas, entre ellas las del sector de palma aceitera, donde han sido asesinados 150 líderes sindicales. *Indicaron que se supone que las empresas deben ser multadas de acuerdo con el Plan de Acción Laboral para cosas tales como la subcontratación ilegal. De las miles de empresas que participan en dicha subcontratación, solamente 18 han sido sancionados, y ninguna de esas sanciones jamás se ha recogido. Hablamos de una huelga en una empresa de palma, Palma de Cesar, donde 5.000 trabajadores fueron golpeados y donde 1.000 de ellos tuvieron que abandonar el área debido a amenazas de muerte.* Hay poca voluntad política para que el Plan de Acción Laboral haga cumplir por parte del Ministerio de Trabajo de Colombia y, de hecho, más líderes sindicalistas han siendo asesinados después de la aprobación del Plan de Acción Laboral. La Embajada de los Estados Unidos también compartió su decepción por la falta de avances con el PAL.

El 5 de Octubre, la delegación participó en un foro sobre los Afro-Colombianos y el proceso de paz en el centro de la Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, organizado por CONPA. Más de 300 Afro-Colombianos de todo el país llegaron al evento y posteriormente marcharon en la Plaza Bolívar (frente al

Congreso), bajo el lema de "Otra Vez Sin Nosotros" o "Una vez más, sin nosotros." Esta marcha es en referencia al hecho de que la población Afro-Colombiana como un grupo colectivo no se ha incluido en las negociaciones de paz. Mientras las víctimas Afro-Colombianas han formado parte de seis delegaciones que tomaron lugar en la Habana y estos participantes han incluido miembros de CONPA que han presentado sus puntos de vista como víctimas de actos específicos de violencia cometidos por las FARC. Sin embargo, temas colectivos de la comunidad Afro-Colombiana no han sido consultados o integrados en los pre-acuerdos. Esto es un factor muy importante que aún se puede incluir, porque sin la opinión de los Afro-Colombianos los preacuerdos se debilitarán considerablemente.

Esta es la tercera vez en los momentos cruciales de la historia de Colombia que los Afro-Colombianos son dejados a un lado. La primera fue después de la abolición de la esclavitud, donde los dueños de esclavos recibieron reparaciones y los esclavos no. El segundo fue durante la Asamblea Constituyente de 1991, tras las conversaciones de paz, donde los Afro-Colombianos no formaron parte y tuvieron que pedirle a un representante Indígena ayuda para garantizar el Artículo transitorio 55 que posteriormente abrió el camino para el desarrollo de la ley 70 de 1993, la ley de la comunidad negra.

En este evento, los líderes Afro-Colombianos expresaron sus puntos de vista sobre el proceso de paz de Colombia. Todos están a favor del proceso de paz pero no creen que los acuerdos vayan a resolver todos los problemas que enfrentan los Afro-descendientes en el país pero si creen que es una oportunidad para desmovilizar a uno de los actores del conflicto y la oportunidad para construir una nueva realidad para los Afro-Colombianos. El CONPA está pidiendo un asiento en la mesa y no sólo por el bien de la participación, pero para garantizar que los acuerdos acordados por el Gobierno y las FARC tengan en cuenta las preocupaciones, derechos y recomendaciones de los Afro-Colombianos. Los problemas de los Afro-Colombianos que se deben estar hablando son los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación; monitorear el alto fuego bilateral y la de-escalada del conflicto en áreas Afro-Colombianas; garantías para la participación política independiente de los Afro-descendientes en las zonas donde las FARC planea fomentar su base política; dirigirse al problema del uso de las drogas ilícitas en los territorios Afro-Colombianos de una manera eficaz y no perjudicial y un esfuerzo para la reforma agraria que fortalezca y respete los derechos colectivos de la tierra de los pueblos Afro-Colombianos.

Las autoridades, organizaciones, y líderes Afro-Colombianos quieren una paz que sea duradera y sostenible. Para garantizar que esto se lleva a cabo tendrán que participar en los esfuerzos de la reintegración y reconciliación que se llevara a cabo en sus territorios entre los desmovilizados y las víctimas del conflicto. Los esfuerzos de seguridad tendrán que ser resueltos con las autoridades con el fin de asegurarse de que funcionen en las áreas Afro-Colombianas. Las lideresas Afro-Colombianas destacaron la necesidad de que las órdenes de la Corte Constitucional para las mujeres desplazadas y sus líderes sean respetadas en una Colombia en post-conflicto.

Lamentablemente, mientras que hubo un panel designado para los Afro-descendientes en el gobierno dos figuras claves no asistieron. La Viceministra del Interior a cargo de las cuestiones étnicas, Carmen Inés Vásquez, no asistió y el segundo fue Luis Gilberto Murillo, el Administrador del Plan Pazífico, que envió a su representante. La falta de su presencia fue vista por los participantes Afro-Colombianos como una falta de interés en la participación de las comunidades Afro-Colombianas en las políticas y los planes que les afectan. Por parte de la Ministerio del Interior, fue especialmente decepcionante ya que este Ministerio ha viajado a los EE.UU. a presentar sus trabajos en relación con el Plan de Acción Racial de Estados Unidos-Colombia (CAPREE), viajó a Ginebra para mostrar "avances" en el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Discriminación Racial y la OEA. Sin embargo, no participó en un foro organizado por líderes Afro-Colombianos.

Los participantes Afro-Colombianos expresaron mucha preocupación sobre la falta de transparencia de los planes y las políticas del Gobierno. También expresaron su descontento al respecto de que el Plan Pazifiko es en gran parte un compromiso que el gobierno hizo con ciertos actores políticos y económicos en la región y que no ha pasado por una consulta previa e informada con autoridades territoriales Afro-Colombianas, cosas que son necesarias por la ley Colombiana. Como un líder dijo, "el gobierno se centra en las relaciones públicas, es decir, ellos quieren presentar planes en los EE.UU. y en otros lugares que son supuestamente planificados con nosotros pero que en realidad hacen todo lo posible para excluirnos."

Conclusiones y Recomendaciones

Basado en los resultados de este viaje, la misión CBTU concluye que hay una pobre aplicación de los derechos laborales y humanos en Colombia, sobre todo en nombre de los Afro-Colombianos. Hacemos las siguientes recomendaciones que creemos son necesarias para mejorar esta situación:

Para el Gobierno EE.UU.:

Enviado Especial para el Proceso de Paz de Colombia:

-Tomar medidas para garantizar que las autoridades territoriales y representantes Afro-Colombianos, bajo la plataforma CONPA, estén integrados en los diálogos de paz en La Habana, Cuba.

-Animar a el gobierno Colombiano y las FARC que incorporen las recomendaciones de CONPA en el acuerdo final e integrar sus líderes en la aplicación.

Secretario del Trabajo y USTR EE.UU.:

-Tome medidas valientes que garanticen que el Plan de Acción Laboral entre los Estados Unidos y Colombia se aplique plenamente. En particular:

-Que la Subcontratación sea eliminada en todas formas.

-Que se reduzca más del 90% de la impunidad de los casos de sindicalistas asesinados. Exigir que la Fiscalía General de Colombia muestre resultados significativos, es decir, que los responsables por los asesinatos de sindicalistas enfrente cárcel

-Que las empresas que violen la PAL paguen por sus infracciones.

-Que el sistema de inspección del trabajo se implemente adecuadamente para mejorar las condiciones laborales para los trabajadores.

-Que un avance significativo ocurra en la aplicación del PAL en los sectores del azúcar, portuarios, la palma de aceite, la minería, y de la flor.

-Que se detengan los nuevos esfuerzos para subvertir la PAL.

-Trabajar Con el Ministerio Colombiano de Trabajo y la OIT para 1) Acabar con la subcontratación y garantizar los derechos laborales de los guardaespaldas que proporcionan protección a los sindicalistas, defensores, activistas y políticos; 2) Garantizar que los trabajadores que fueron despedidos por organizarse debido al PAL en los sectores prioritarios sean recontratados o compensados; 3) Enfocarse en la cuestión de las pensiones perdidas debido a la subcontratación de trabajadores en los sectores donde el PAL tiene prioridad; 4) Poner un fin inmediato al decreto que se

está desarrollando para despedir a los trabajadores lesionados en Colombia con más facilidad; 5) Poner en marcha una línea de tiempo con Colombia por el cual deben ser reportados los resultados, y 6) Trabajar con los sindicatos y activistas Afro-Colombianos para ayudar a implementar el Plan de Acción Laboral de los Estados Unidos-Colombia en el sector laboral de Colombia.

-Garantizar que la misión de la OIT en Colombia se renueva y que su trabajo se expanda para poder implementar la aplicación de la PAL.

-Abogar con el Congreso de los Estados Unidos para garantizar que un paquete del post-conflicto en Colombia incluya un fuerte apoyo para la aplicación de la PAL y la inclusión de los derechos de los trabajadores y las preocupaciones particulares que afectan a mujeres Afro-Colombianas y los trabajadores en los EE.UU. con el apoyo de ayuda para el acuerdo de paz.

Departamento de Estado de EE.UU. y la Embajada de EE.UU.:

-Apoyar las recomendaciones y los esfuerzos de CONPA para garantizar un proceso de paz inclusivo y un post-conflicto que responda a las preocupaciones y necesidades de las víctimas y las comunidades Afro-Colombianas.

-Condenar públicamente las violaciones del Plan de Acción de Laboral de los Estados Unidos-Colombia y abusos de los derechos humanos cometidos contra los Afro-Colombianos e Indígenas.

- Destacar los abusos laborales y humanitarios que enfrentan los Afro-Colombianos anualmente en el reporte anual del el Departamento de Estado de los EE.UU sobre Colombia , y garantizar el cumplimiento de la Ley Leahy, que exige el cese de la ayuda militar a unidades culpables de violaciones de los derechos humanos.

-Trabajar con sus homólogos Colombianos para enfrentar los derechos humanos, laborales, los derechos colectivos de la tierra y los problemas de protección que afectan a las comunidades Afro-Colombianas e Indígenas. En particular, garantizar la plena aplicación de las condiciones de derechos humanos de los Estados Unidos para la recepción de ayuda militar en Colombia.

-Abogar en todos los espacios pertinentes para una mayor inclusión social de las comunidades Afro-Colombianas e Indígenas en la sociedad Colombiana y los esfuerzos para combatir la discriminación racial.

-Urgir al gobierno Colombiano que respete el derecho de las comunidades Afro-Colombianas e Indígenas y obtener un consentimiento informado en todos los proyectos de desarrollo destinados a sus territorios

-Intervenir para ayudar a resolver la situación que Feliciano Valencia de la ACIN confronta.

Para USAID:

-Trabajar Con el CONPA para crear un paquete de post-conflicto que expanda el actual Programa Afro-Colombiano e Indígena (ACIP) de manera que se dirija a los derechos humanos, la justicia, el desplazamiento, las mujeres, los jóvenes, los derechos colectivos de la tierra, y problemas ambientales que enfrenta Afro-descendientes.

-Garantizar que todos los fondos de USAID a las instituciones Colombianas incluyan fuertes mecanismos de vigilancia para prevenir la corrupción y el mal uso de los fondos. El financiamiento

para fortalecer los programas gubernamentales para las comunidades Afro-Colombianas e Indígenas. También incluir la consulta previa en estas comunidades y que estos programas operen con transparencia total y la integración de estas comunidades.

ⁱ El CONPA es una coalición de autoridades y organizaciones Afro-Colombianas que fue fundada en Noviembre del 2014 para unificar las voces y propuestas de los Afro-Colombianos para los diálogos de paz. Se trata de un espacio representativo y autónomo de las naciones y organizaciones regionales Afro-Colombianas cuyo objetivo es construir y hacer visible el procesos de organización en la búsqueda de la paz y la protección de la población Afro-Colombianos en las mesas de negociación entre el gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Incluye pero no se limita a la Autoridad Nacional Afro-Colombiana (ANAFRO), Asociación Nacional de Afro-Colombianos Desplazados (AFRODES), Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), Centro Pastoral Afro-Colombiano (CEPAC), Consejo Laboral Afro-Colombiano (CLAF), Conferencia Nacional de Organizaciones Afro-Colombianas (CNOA), El Foro Interétnico de Solidaridad del Chocó (FISCH), Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) y la Red Nacional de las mujeres Afro-Colombianas (Kambiri).

ⁱⁱ Entre los participantes: Willie L. Baker, Jr. - Coalición de Sindicalistas Negros (CBTU); Daniel Kovalik - United Steelworkers, AFL-CIO / CLC (USW); Sheila Gruner - Profesor de la Universidad Algoma (ON, Canadá); Walter Turner - Corresponsal, Radio Pacífica y la Junta - Global Exchange; y Carlos Quesada - Instituto para la Raza y la Igualdad y Gimena Sánchez, de WOLA.